

Editorial

Frenazo al crecimiento por la crisis catalana

El desafío al Estado de Derecho de la Generalitat que preside Carles Puigdemont no sólo está impactando en la economía catalana, sino también sobre la actividad económica en el resto de España. Así lo reconoce el propio Gobierno en el Plan Presupuestario que ha enviado a la Comisión Europea, que incluye una rebaja de la previsión oficial de PIB para el próximo ejercicio desde el 2,6% hasta el 2,3%, cuando hace sólo unas semanas todos los analistas habían revisado sus estimaciones para situarlas próximas al 3%. Un frenazo que será apreciable ya en el último trimestre de este año, según la patronal CEOE, que revisó a la baja el crecimiento esperado para el conjunto de la economía española en este 2017 hasta el 3% desde el 3,2% previo. Y es que la prolongación de la incertidumbre provocada por el golpe institucional perpetrado por las autoridades autonómicas catalanas es la mayor amenaza a la fuerte recuperación protagonizada por la economía española durante los últimos trimestres, que ha colocado a nuestro país como uno de los que más crecen en la zona euro.

Temor inversor. La preocupación de los empresarios por la inseguridad jurídica derivada de la declaración unilateral de independencia que proclamó y a continuación dejó en suspenso Puigdemont la semana pasada en el Parlamento catalán y por su negativa a volver a la legalidad pese al requerimiento del Consejo de Ministros explica que durante los últimos diez días casi 700 compañías hayan decidido trasladar sus sedes de Cataluña a otras regiones españolas. La expresión más gráfica de esa inquietud empresarial es que entre el 9 y el 16 de octubre los notarios y registradores catalanes tramitaron más solicitudes de traslado que en los nueve meses anteriores. Al tiempo que ayer se produjeron nuevos anuncios en este sentido –Cespa y La Bruixa d'Or–, representantes de los grandes fondos de inversión reunidos en Londres alertaron de que el mantenimiento de la tensión secesionista afectaría a sus decisiones de inversión, justo cuando España habría logrado ser uno de los grandes polos de atracción para los fondos de capital riesgo, que en los nueve primeros meses del año invirtieron 4.000 millones de euros en nuestro país. Tampoco conviene pasar por alto la advertencia de la agencia de calificación Moody's respecto al potencial impacto de la amenaza secesionista: "El *impasse* en torno a Cataluña deja poco clara la futura trayectoria crediticia española", apuntó sólo tres días antes de publicar la revisión periódica del *rating* de España.

Si la incertidumbre política se prolonga en Cataluña, afectará al *rating* de España

Frenazo turístico. Más inmediato aún es el efecto que la deriva rupturista de la Generalitat catalana está provocando sobre la demanda de los turistas. El principal *lobby* de esta industria, **Exceltur**, denunció ayer que desde el pasado 1 de octubre la actividad turística en Cataluña ha disminuido un 15% y las empresas del sector han frenado todas las inversiones que tenían previsto realizar hasta final de año. El daño se multiplicaría exponencialmente si la inestabilidad se prolonga durante los próximos meses, lo que provocaría que el negocio turístico en Cataluña –la región española que más turistas recibe– se desplomase hasta un 30%.

Riesgo en alza. La percepción del riesgo creciente en Cataluña es generalizada, como evidencia la decisión de SegurCaixa Adeslas de rescindir el seguro de responsabilidad civil contratado por el Parlamento catalán debido a la "gravísima agravación del riesgo" político. Por ello, si Puigdemont no da su brazo a torcer el jueves el Gobierno debe actuar con firmeza y rapidez para restablecer el orden constitucional en Cataluña. Sólo así será posible revertir la inquietud empresarial y limitar el impacto en la economía catalana y la del resto del país. Esta severa crisis institucional no puede cerrarse en falso ni con nuevos privilegios para quienes han tratado de quebrantar la legalidad, algo que conllevaría un riesgo moral elevado y, como alerta Moody's, si pasa por aumentar la autonomía fiscal de las autonomías podría tener implicaciones negativas para el riesgo soberano de España.

Si Puigdemont no da su brazo a torcer el jueves, el Gobierno debe actuar con firmeza y rapidez